



3 7 2 3 0

Violaciones a los derechos humanos

Colombia en el infierno

El gobierno de José Manuel Santos, tras una apariencia más moderada, mantiene la política de terror instaurada por su antecesor, Alvaro Uribe, especialmente a través de las llamadas "Zonas de Rehabilitación y Consolidación" y el decreto 2002, que restringe las libertades ciudadanas y facilita la represión, apoyada por Estados Unidos.

El periodista sueco Dick Emanuelsson recorrió los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena, recogiendo testimonios de campesinos, trabajadores, sindicalistas y los políticos del departamento. Este es el reportaje.





DICKEMANUELSSON

Martín Sandoval, diputado departamental del Partido Comunista Colombiano en Arauca, asegura que las zonas de "Rehabilitación y consolidación", proclamadas por el gobierno de Santos, en realidad son "zonas de represión" y explica que su colectividad rechaza tanto el Decreto 2002", es decir las restricciones de las libertades de los derechos humanos, como la "intromisión norteamericana" en el departamento.

El Partido Comunista del pequeño departamento es un partido de masas, con más de seis mil afiliados, que en los últimos 5 a 6 años han sido golpeados por la guerra sucia y los políticos corruptos, por lo que de 25 conceja-

les, ocho diputados departamentales, tres alcaldías más una en alianza (de seis alcaldías en todo el departamento) y cuatro diputados parlamentarios nacionales, se han reducido ahora a dos alcaldías, Arauquita y Fortúl, dos diputados departamentales y ocho concejales.

Sandoval explica que los comunistas en Arauca han tenido históricamente una presencia grande en las organizaciones populares de masas: "Afortunadamente en el caso de Arauca, la guerra sucia no nos ha golpeado tanto como en otros departamentos como Meta, Magdalena Medio o regiones como Urabá. Todavía tenemos una presencia parlamentaria considerable, pero nos han asesinado y nos han desaparecido a muchos compañeros de base, entre ellos a nuestro candidato de la Unión Patriótica a la gobernación, Octavio Sarmiento".

Octavio Sarmiento había sido alcalde dos veces en Tame y senador de la república. Sus familiares en el municipio de Tame ahora son amenazados a muerte por grupos de extrema derecha y están por irse del país, antes de ser asesinados. En Tame también fue asesinado el 8 de noviembre a las 10:45 a.m. José Rusbel Lara a tres cuadras de la estación de policía del municipio. Lara fue directivo del Comité Regional de Derechos Humanos "Joel Sierra". En Tame han sido asesinadas más de 150 personas, según la organización de DD.HH.

Martín Sandoval se nota triste y, por qué no decirlo, decepcionado. Los comunistas y la UP han enterrado más de 4.000 de sus mejores cuadros, víctimas, como dice Sandoval, del terrorismo paraestatal, pero a pesar de ello sigue en la pelea.

Las zonas especiales en Arauca

El 23 de septiembre, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez decidió instalar en tres de los seis municipios de Arauca una llamada "Zona de Rehabilitación y Consolidación", en boca popular llamada Zona de Teatro de Operaciones de Guerra. Aquí todo se registra, hasta la motocicleta, vehículos, barquitos en el río y por supuesto cada persona.

Los organismos de derechos humanos y la prensa extranjera nos encontramos en una reglamentación muy restringida y puede durar hasta ocho días antes que el gobernador, con el aval de las fuerzas militares, entregue el permiso para entrar a estas zonas del país.

Martín Sandoval rechaza la medida: "No son zonas de "rehabilitación",



son zonas de represión y son totalmente ilegales, porque violan las leyes del estado de derecho y las libertades de la ciudadanía. No las compartimos de ningún punto de vista porque seguimos insistiendo que la solución del conflicto no es por la vía militar sino que se deben buscar otros mecanismos. Es urgente que se abran los diálogos de paz con la insurgencia, que prontamente lleguen a un intercambio que precisamente abra las puertas a un posible reinicio de diálogos. Que retomen la agenda de La Habana con ELN y la Agenda Común con las FARC".

A juicio de Sandoval, las zonas instaladas se las hace con el único propósito de proteger y defender a la norteamericana transnacional petrolera Oxy y el oleoducto, donde la

familia Bush tienen muchas acciones: "Cómo puede justificarse declarar la zona en los municipios de Arauquita, Arauca y Saravena pero no en los municipios de Tame y Cravo Norte, donde campean divinamente a la luz del día y con complacencia institucional los paramilitares asesinando siniestra a la población. Es alarmante en TAME, donde ellos han asesinando 150 personas de una población de 39.000 habitantes. Pero como Tame no hay interés transnacional, siguen sencillamente asesinando a la gente los paramilitares.

Hace pocas semanas, también arribó la embajadora norteamericana, Anne Patterson, a Arauca. Desembolsó 98 millones de dólares para la 18^a brigada del ejercito para la protección del oleoducto de Caño Limón-Coveñas y for-



PLAN COLOMBIA

LOS GRINGOS PONEN LAS
ARMAS COLOMBIA PONE
LOS MUEROS.



MOVIMIENTO BOLIVARIANO



Enrique Pertús:
“420
asesinatos
en diez
meses”

**Presidente de Comisión de
Derechos Humanos
de Arauquita denuncia
incremento de la violencia.**



La situación en el departamento es bastante preocupante y tiende a agravarse, dice Enrique Pertús, presidente de la Comisión Permanente por los Derechos Humanos en el municipio de Arauquita. Su relato es impactante: en los primeros diez meses del año han sido asesinadas selectivamente 420 personas bajo el conflicto armado. 43 personas son desaparecidas. Noventa por ciento son civiles y de estos crímenes 95% quedan en impunidad. Con la llegada del paramilitarismo, crecen las violaciones de los derechos humanos, a lo que se suma el Decreto 2002, en el marco de la Conmoción Interior.

Después de 30 días de haber creado estas zonas, no hay un solo guerrillero o paramilitar detenido.

Pertús explica que en Arauquita se han realizado numerosos allanamientos y detenciones masivas: "Después de saquear las casas de la población civil, el ejército los encerró en un galpón de 10x10 metros. De las 156 personas, unas 18 fueron seleccionadas y denunciadas por ser, auxiliadores de la guerrilla. Fueron colocadas ante la fiscalía que a su vez tuvo que soltarlas después de cinco días, porque no encontró pruebas ni documentos que generaran una detención o los vinculara con grupos insurgentes dentro del área. En esos allanamientos o detenciones, y como en otros, el ejército está utilizando personas encapuchadas y personas que están comprometidas con crímenes de lesa humanidad".

El dirigente de Derechos Humanos denuncia que uno de los colaboradores del Ejército, Metalis Santana, está comprometido con la masacre que se presentó en el pueblo de El Triunfo, donde fue degollada una familia completa de niños y adultos. Pertús afirma: "Llegó una delegación de la unidad de la fiscalía, preocupada por nuestras denuncias. La fiscalía contestó que Santana está detenido, pero se ha demostrado que no es así, sino que duerme tranquilamente en la Brigada 18. Y lo que es peor, está siendo utilizado por hacer señalamientos a sectores de la población civil, donde este señor anteriormente se desplazó, vivió y convivió con las comunidades".

talecer las tres estaciones de policía bajo las zonas de guerra. Informó que en el mes de enero arribarán cien instructores norteamericanos en lucha contrainsurgencia, cuya llegada está siendo preparada por cuatro norteamericanos de las Fuerzas de Operaciones Especiales hace tres meses.

Para los comunistas, esta visita fue rechazada como "una intromisión" y Martín Sandoval, en calidad de diputado, fue invitado pero se negó rotundamente a asistir al evento. En

éste había solamente tres banderas de la 18^a Brigada detrás la tarima pero ni siquiera una bandera colombiana: "Para nuestro partido la visita de la embajadora es indigna, reprochable y rechazable por la clara intromisión en nuestros asuntos internos. Consideramos que esta situación va a agudizar el conflicto donde la población en estas zonas va a pagar las consecuencias. Son ellos que son detenidos y maltratadas, cuyo único delito es que viven en zona de conflicto". •



Informe de Derechos Humanos

Santos sigue la huella de Uribe

22 activistas de derechos humanos han muerto en los primeros 75 días del nuevo gobierno.

Al menos 22 activistas, un periodista y un juez murieron durante los primeros 75 días del gobierno de Juan Manuel Santos, según un informe de grupos pro derechos humanos presentado la semana pasada en Washington.

El Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) y otras organizaciones expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el documento, que se basa en los datos de una plataforma que reúne a cerca de 200 organizaciones pro derechos humanos, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU).

En concreto, el informe detalla la muerte de cinco activistas defensores de las tierras, siete líderes indígenas, una defensora de los derechos humanos, cinco sindicalistas, dos mujeres educadoras comunitarias y dos miembros de organizaciones de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transexual (LGBT).

Además, da cuenta del homicidio del juez Pedro Elías Ballesteros Rojas y el periodista Rodolfo Maya Aracape, corresponsal de una radio comunitaria indígena.

Otro caso documentado es el asesinato de tres niños en el Municipio de Tame el 14 de octubre que, según las organizaciones, fue perpetrado por miembros del Batallón de contraguerrillas número 45, adscrito

a la Brigada Móvil número 5 de la octava división del Ejército Nacional.

Igualmente, se exponen amenazas y hostigamiento a decenas de organizaciones pro derechos humanos y sus miembros a lo largo de las 21 páginas del informe titulado «Las palabras y los hechos. Los primeros 75 días del Gobierno de Juan Manuel Santos y la situación de los derechos humanos».

Santos asumió la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2010.

Tras una audiencia de la CIDH, que celebra estos días el 140º período de sesiones, María Victoria Fallon, de GIDH, dijo que el informe pretende demostrar que existe una «continuidad con otro lenguaje» entre el gobierno actual y el anterior de Álvaro Uribe en cuanto a la situación de derechos humanos.

«Puede haber un cambio de estilo, pero tiene que verse en la práctica», señaló Fallon, quien insistió en que los datos son un «subregistro», en alusión a que podría haber más muertes no documentadas.

En la audiencia, Fallon pidió a los comisionados de la CIDH una visita a Colombia para evaluar la situación denunciada. Además, aseguró que los grupos pro derechos humanos necesitan el «apoyo» de la comisión para que se avance en el trabajo para una política de atención y reparación de daños a víctimas.